

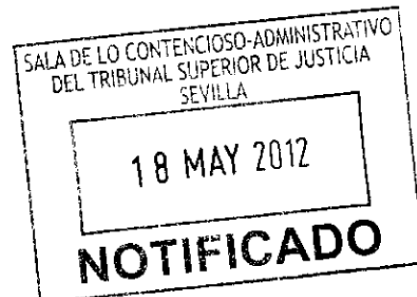
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SEVILLA

SENTENCIA



Ilmos. Sres.:

D. Antonio Moreno Andrade

D. Eduardo Herrero Casanova

D. Ángel Salas Gallego

En la ciudad de Sevilla, a 27 de Abril de 2012.

Vistos los autos 800/10, seguidos ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en los que ha sido parte actora Don _____, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Gordillo Cañas, y parte demandada el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (TEARA), representado y defendido por el Sr. Abogado del Estado, siendo codemandada la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, representada y defendida por Sr. Letrado de la Junta de Andalucía.

Fue fijada la cuantía en 4.997'42 euros.

Se turnó la ponencia al Ilmo. Sr. D. Ángel Salas Gallego, quien expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Interpuesto el recurso contencioso-administrativo, se presentó la demanda dentro del plazo legal.

Segundo. - La parte demandada, en su contestación a la demanda, solicitó una sentencia confirmatoria de la Resolución recurrida, al igual que la codemandada.

Tercero. - Señalado día para su votación y fallo, tuvo lugar con el resultado que a continuación se expone.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - La parte actora formula su recurso contra la resolución del TEARA de fecha 28 de Mayo de 2010, recaída en reclamación número 14/435/10, interpuesta contra liquidación practicada por la Delegación en Córdoba de la Consejería de Economía y Hacienda por el concepto Transmisiones Patrimoniales.

Segundo. - Como se resume en la demanda, son tres los motivos en los que se articula la impugnación: nulidad por aplicación de los coeficientes de la Orden de 18 de Diciembre de 2008 sin la previa autorización legal exigida; falta de motivación y justificación legal de la valoración; y falta de la exigencia de publicidad y transparencia en el expediente administrativo, con vulneración del art 105 CE.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales esta constituida por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda. Mientras que el artículo 46 del mismo cuerpo legal establece por su parte que la Administración podrá, en todo caso, comprobar el valor real de los bienes y derechos transmitidos (apartado 1), comprobación que según el apartado 2 del mismo precepto se llevará a cabo por los medios establecidos en el art 52 de la Ley General Tributaria (se refiere a la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,

General Tributaria, por lo que hoy en día la remisión debe entenderse hecha al artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

Pues bien, el artículo 57.1 de la Ley General Tributaria de 2003 establece diversos métodos para comprobar el valor de los bienes determinantes de la obligación tributaria, entre los que se encuentra el de estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal aplicado por la Administración -apartado b-; pudiendo la Administración, para verificar esa actuación de comprobación de valor, utilizar indistintamente cualquiera de estos medios, como establece el artículo 23 de la Ley andaluza 10/2002, de 21 de diciembre -aplicable a nuestro caso por razones de orden temporal-, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, en orden a efectuar la comprobación de valores a efectos del ITPAJD

Así lo hizo la Administración demandada, que para realizar su valoración se atuvo en última instancia al método previsto en el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria con las precisiones contenidas en el artículo 23.2 de la Ley 10/2002, en cuya virtud, cuando se utilice el medio referido en el art 57.1.b) de la Ley General Tributaria, el valor real de los bienes inmuebles de naturaleza urbana se podrá estimar a partir del valor catastral que figure en el correspondiente registro fiscal; a tal efecto, al valor catastral actualizado a la fecha de realización del hecho imponible se le aplicará un coeficiente multiplicador que tendrá en cuenta el coeficiente de referencia al mercado establecido en la normativa reguladora del citado valor y la evolución del mercado inmobiliario desde el año de aprobación de la ponencia de valores; y la Consejería de Economía y Hacienda publicará anualmente los coeficientes aplicables al valor catastral y la metodología seguida para su obtención.

La previsión legal a que nos acabamos referir desvirtúa el

argumento impugnatorio de la parte actora a partir del cuál sostiene que de acuerdo con lo previsto en el artículo 57.1.b) LGT no media autorización, vía reglamento autonómico, para aplicar los coeficientes señalados en la Orden reseñada. Pues ha sido el legislador autonómico el que a través del precepto reseñado con rango de ley, y de acuerdo con la competencia normativa atribuida a la Comunidad Autónoma por la Ley 19/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, ha previsto en orden a determinar el valor real del bien siguiendo el método del artículo 57.1.b) LGT, la aplicación al valor catastral actualizado del coeficiente multiplicador, y la fijación de éste por la Consejería de Economía y Hacienda a través de órdenes publicadas anualmente, en este caso la Orden de 18 de diciembre de 2008.

Más concretamente, según resulta de la comprobación de valor de 20-10-2009 obrante al folio 11 de un desordenado expediente de gestión, la valoración asignada al bien transmitido se obtiene mediante la aplicación a su valor catastral a la fecha de realización del hecho imponible, del coeficiente multiplicador que para estimar su valor real a efectos del ITPAJD se recogen para cada municipio, junto a las reglas para su aplicación y el método a seguir, en la Orden de 18 de Diciembre de 2008 de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que fija para el municipio de Córdoba, y para el año 2009, un coeficiente multiplicador del valor catastral de 4,00.

Este modo de proceder de la Administración es, pues, acorde con la normativa aplicable a la que nos hemos referido.

Tercero. - Al respecto de la falta de motivación a que alude la parte actora en relación con la valoración efectuada por la Administración, y de los motivos de impugnación articulados en torno a la misma, debemos reproducir en primer lugar cuanto acabamos de exponer en torno a la competencia

normativa autonómica en la regulación del método aplicado en desarrollo de lo establecido en el artículo 57.1.b) LGT , y, por ende, en lo atinente a la fijación del coeficiente multiplicador en orden a determinar el valor real del inmueble tomando como referente el valor catastral del mismo; habiéndose atendido por tanto la realización de esa comprobación de valor a los criterios legales establecidos en el método previsto en el artículo 57.1.b) de la LGT (estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal aplicado por la Administración) y desarrollados en la Ley autonómica 10/2002. A ello ha de añadirse que, como reza el preámbulo de la Orden de 18 de diciembre de 2008, ésta tiene precisamente en cuenta lo dispuesto en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, cuyo artículo 158.1 establece que, en caso de aplicación del medio de valoración establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , se exigirá que "la metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez hayan sido objeto de aprobación y publicación por la Administración tributaria que los vaya a aplicar".

En segundo lugar, constan en el informe de valoración los datos relativos a la identificación e individualización del inmueble, su valor y referencia catastrales, el método de valoración aplicado, la publicación en que consta el coeficiente multiplicador con referencia al aplicable en este caso, y finalmente la operación practicada al amparo del artículo 23.2, con el resultado que arroja, individualizándose el bien cuyo valor se comprueba a partir de la información que sobre el mismo aparece recogido en el expediente una vez contrastada con las características físicas, jurídicas y

económicas del mismo recogidas en el registro fiscal de la Dirección General del Catastro.

Ahora bien, estando debidamente motivada por lo expuesto esa comprobación de valor en lo referente a la identificación e individualización del bien, coeficiente multiplicador, y método de valoración utilizado, no sucede lo propio con la determinación del valor catastral actualizado del inmueble transmitido. A tal efecto, lo único que se contempla en el documento de motivación de la comprobación de valor es que el valor catastral del bien es de 100.748'24 euros y que el año de aplicación de la revisión catastral es 1995. Esto es, no se explica cómo se ha determinado el valor catastral del inmueble actualizado al año 2009 (año de devengo al datar la escritura de compraventa de 4 de agosto de 2009), ni, más concretamente, cuál es el valor de partida (valor catastral en 1995, año de aplicación de la revisión catastral) para alcanzar esa suma, ni cuáles han sido los específicos coeficientes de actualización tenidos en consideración a tenor de las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado para a partir de los mismos determinar el valor catastral del inmueble en el año 2009.

La valoración de la Administración, cuando como en nuestro caso no coincide con la declarada por el obligado tributario, debe estar debida y expresamente motivada, motivación que ha de ser puesta en su conocimiento para que en su caso pueda alegar y probar lo procedente en orden a contradecirla. Así resulta de lo dispuesto en la LGT, que en su artículo 102.2.c) dispone que las liquidaciones tributarias se notificarán con expresión de la motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario; mientras que el artículo 134.3 del mismo cuerpo legal establece que si el valor determinado por la Administración tributaria es distinto al declarado por el obligado tributario, aquélla, al tiempo de notificar la propuesta de regularización, comunicará la propuesta de valoración debidamente motivada, con expresión de los medios y criterios empleados.

En relación con la motivación de los actos de comprobación de valores el Tribunal Supremo ha señalado en la sentencia de 3 de diciembre de 1999, con cita de las de 3 y 26 de mayo de 1989, 20 de enero y 20 de julio de 1990, 18 de junio y 23 de diciembre de 1991, 8 de enero de 1992, 22 de diciembre de 1993, 24 y 26 de febrero de 1994, 4 , 11 y 25 de octubre y 21 de noviembre de 1995, 18 y 29 de abril y 12 de mayo de 1997 y 25 de abril de 1998, que "la jurisprudencia ha sentado la doctrina de que los informes periciales que han de servir de base a la comprobación de valores, deben ser fundados, lo cual equivale a expresar los criterios, elementos de juicio o datos tenidos en cuenta; que la justificación de dicha comprobación es una garantía tributaria ineludible; que por muy lacónica y sucinta que se interprete la obligación administrativa de concretar los hechos y elementos adicionales motivadores de la elevación de la base, no puede entenderse cumplida dicha obligación impuesta por el art. 121 de la Ley General Tributaria, si se guarda silencio o si se consignan meras generalizaciones sobre los criterios de valoración o solo referencias genéricas a los elementos tenidos en cuenta mediante fórmulas repetitivas que podrían servir y de hecho sirven, para cualquier bien.

Por el contrario -continúa diciendo esa sentencia- la comprobación de valores debe ser individualizada y su resultado concretarse de manera que el contribuyente, al que se notifica el que la Administración considera valor real, pueda conocer sus fundamentos técnicos y prácticos y así aceptarlo, si llega a la convicción de que son razonables o imposibles de combatir, o rechazarlos porque los reputa equivocados o discutibles y en tal caso, solo entonces, proponer la tasación pericial contradictoria a la que también tiene derecho.

Analizando a la luz de esta jurisprudencia la valoración efectuada por la Administración se ha de concluir por lo expuesto que la misma no se encuentra debidamente motivada en lo relativo al valor catastral actualizado del inmueble, parámetro de referencia para determinar el valor real del

inmueble según el método de valoración utilizado regulado en los artículos 57.1.b) LGT y 23 de la Ley andaluza 10/2002, pues en el informe de valoración no se explica cómo se alcanza el valor catastral del inmueble actualizado al año 2009, ni más concretamente qué valor de partida y qué específicos coeficientes de actualización anuales se han tenido en cuenta para determinarlos, junto a la conformidad de éstos con los establecidos en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

De lo razonado resulta que en este caso se ha vulnerado el derecho del contribuyente a conocer en plenitud los fundamentos técnicos y fácticos de la valoración efectuada por la Administración, necesario para que en su caso pueda combatirla a través de los medios y argumentos de contradicción e impugnación que las normas procedimentales le confieren, circunstancia generadora de indefensión al impedirle ejercitar debidamente su derecho de defensa, y que ha de abocar en nuestro caso a la anulación de la liquidación impugnada -a la que sirve de fundamento la comprobación de valores a la hora de fijar la base imponible del impuesto- y de la Resolución del TEARA que la confirma.

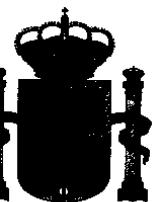
Cuarto.- No es de apreciar temeridad ni mala fe para hacer una expresa condena en costas.

Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos el presente recurso deducido contra la resolución recogida en el primer Fundamento de Derecho, la cual anulamos por no ser conforme al ordenamiento jurídico, así como la liquidación de la que trae causa. Sin costas.

Firme la presente sentencia, devuélvase el expediente,



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

junto a una copia de la misma, a los efectos oportunos.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber los recursos en su caso procedentes.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.